DECRETO de 13 de mayo de 1954 por el que se dictan normas reguladoras de la ocupación de terrenos de dominio público por líneas de la Red Nacional de Comunicaciones, a que se refiere el Decreto del Ministerio de Obras Públicas de 10 de octubre de 1952.

Regulada de forma parcial la ocupación de terrenos de dominio público por líneas telefónicas por el Decreto del Ministerio de Obras Públicas de diez de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, por Decreto de doce de febrero siguiente se creó una Comisión interministerial a fin de que propusiera unas normas a las que en lo sucesivo deberían atenerse todos los servicios que integran la Red Nacional de Comunicaciones y que resolverían armónicamente los problemas que pudieran presentarse cuando la construcción o mejora de alguno de ellos implicara alteraciones en las ocupaciones de terrenos de dominio público, previamente autorizadas o concedidas a los otros servicios públicos de comunicación, con vistas, principalmente, a las alteraciones que ha de provocar el Plan General de Modernización de Carreteras.

Atendidos los términos de la concesión vigente de la Compañía Telefónica Nacional de España, originada en contrato con el Estado, a tenor de la Ley de Bases, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, y la atribución directa al Estado de la red telegráfica, había de partirse de unos supuestos conforme a los cuales en la ocupación de terrenos de dominio público por las líneas e instalaciones telegráficas y telefónicas eran precisas normas distintas de las generales que, en forma sumaria, concretaran sólo el alcance físico de la ocupación a realizar o de las ya realizadas.

Se ha dado intervención a todos los servicios interesados en los expedientes de las obras públicas y, en fin, se decide, atendiendo a razones de equidad y de equilibrio presupuestario, la participación de los servicios afectados en los gastos de traslado y modificación de las líneas telegráficas y telefónicas.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de la Gobernación y Obras Públicas y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.—Cuando para el establecimiento de líneas o instalaciones telefónicas y telegráficas sea precisa la ocupación de bienes de dominio público, se concretará la extensión y ubicación de las mismas, previo sumario expediente, a título gratuito y sin pago de canon ni indemnización alguna, en la forma reglamentariamente establecida para cada servicio por los diferentes organismos de la Administración Central, Provincial o Municipal, o, en general, de las Corporaciones o entidades de carácter público que tengan a su cargo el servicio o la obra a que estén afectos aquellos bienes.

Artículo segundo.—Se entenderán legalizadas las ocupaciones de bienes de dominio público que en la actualidad estén ocasionadas por líneas o instalaciones de carácter telegráfico o telefónico, mediante su registro en el organismo correspondiente.

Artículo tercero.—Para la aprobación de planes de obras públicas que impliquen la modificación o traslado de líneas telegráficas o telefónicas ya instaladas en terrenos de dominio público, será preciso que al acuerdo del organismo competente preceda vista del expediente y audiencia, que se darán por término de quince días a la Dirección General de Correos y Telecomunicación o la Compañía Telefónica Nacional de España, respectivamente.

Artículo cuarto.—Los gastos que ocasione la modificación o traslado de las líneas telefónicas o telegráficas serán satisfechos en una mitad con cargo al presupuesto del servicio u obra pública que demande la modificación o traslado de las mismas, y la otra mitad, por la Compañía Telefónica Nacional de España si se tratara de líneas telefónicas, o por la Dirección General de Co-

reos y Telecomunicación, si se tratara de líneas telegráficas.

Artículo quinto.—A los efectos prevenidos en el artículo anterior y en la tramitación del proyecto correspondiente se estudiará y aprobará, conjuntamente, el proyecto y presupuesto de gastos de las modificaciones o traslados de las líneas telegráficas y telefónicas afectadas.

Artículo sexto.—Para los proyectos de obras ya aprobados se formularán por los organismos interesados los adicionales precisos cuando la ejecución del proyecto implique la modificación o traslado de líneas de telecomunicación.

Artículo séptimo.—Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá aplicable a las restantes líneas de telecomunicación afectas a servicios de carácter oficial o público, si por éstas fuere así solicitado, en su caso.

Artículo octavo.—Por los Ministerios interesados se dictarán o propondrán, conjuntamente, las disposiciones complementarias a que dé lugar la aplicación del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DECRETOS de 23 de abril de 1954 por los que se concede la nacionalidad española a los señores que se indica.

A propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a don Enrique Salmán Alonso, súbdito jordano y Canciller auxiliar del Consulado General de España en la Zona árabe de Jerusalén.

Artículo segundo.—La expresada concesión no producirá efecto alguno hasta que el interesado preste juramento de fidelidad al Jefe del Estado, de obediencia a las Leyes españolas, con renuncia a todo pabellón extranjero, y sea inscrito en el Registro Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

A propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a Buselham Ben Ahmed Meydub, súbdito marroquí, soldado de Regulares y ex combatiente de nuestra Guerra de Liberación.

Artículo segundo.—La expresada concesión no producirá efecto alguno hasta que el interesado preste juramento de fidelidad al Jefe del Estado, de obediencia a las Leyes españolas, con renuncia a todo pabellón extranjero, y sea inscrito en el Registro Civil.